

DATOS Y COMENTARIOS DE COYUNTURA COLOMBIANA

No. 74

Agosto 7 – Noviembre 15 de 2017

Podion: Dr. Jaime H. Díaz A.

El sino trágico del padre

Si nos atenemos al dicho popular “en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”, los primeros 100 días del gobierno Duque, dejan muchos interrogantes y preocupaciones. No es ni justo ni prudente lanzarse lanza en ristre contra todo lo que provenga de este presidente, se puede valorar su actitud propositiva así uno no esté de acuerdo con sus propuestas; su ánimo conciliador y no camorrero, así sepamos que las conciliaciones no son la medida de la justicia, sobre todo cuando el injusto quiere hacer prevalecer su posición. El presidente es un hombre amable, bonachón, inteligente, estudioso, sereno, pulcro y honesto, también “naive” (ingenuo). Su juventud le permite trabajar intensamente y está acostumbrado a ello, además a ser exigente consigo mismo, pero peca por la falta de experiencia, desconoce el país. Su contacto con la Colombia real había sido muy escaso, no tuvo la oportunidad de hacerlo: poco tiempo después de culminar su carrera de abogado en una Universidad en Bogotá, cuna del conservadurismo, se desempeñó en Washington en cargos de menor rango en distintas entidades bancarias internacionales, mientras adelantaba algunos estudios de postgrado, hasta que el Sr. Uribe hace 5 años lo trajo para que formara parte de su lista al Senado. En el Congreso se distinguió por su seriedad y caballerosidad, pero siempre “a la sombra” de expresidente-senador.

Su falta de experiencia e inseguridad, lo lleva a rodearse de sus amigos y conocidos de confianza, desde los compañeros de colegio (Rochester), pasando por los de Universidad (Sergio Arboleda), y de su trabajo en Washington (BID). Pero siempre teniendo sobre su cabeza la mirada del “gran hermano” Alvaro Uribe.

Quiere situarse en el ala moderada de un partido de derecha que representa los intereses de terratenientes, clasistas, tradicionalistas, militaristas, fundamentalistas que añoran la Constitución del Siglo XIX. Es un presidente errático, mientras habla de buscar la equidad, presenta una reforma tributaria, totalmente inequitativa “reducción de impuestos para los ricos, afectación mayor de impuestos para los pobres”; no gobernar con mermelada (concesión de prebendas), pero busca privatizar los recursos públicos en manos de la clase política; llama a la austeridad del Estado, pero sale semanalmente a las regiones a prometer obras sacadas del presupuesto nacional al estilo de Fujimori y evidentemente de su referente, el expresidente Uribe. Quiere aparecer como un gran benefactor. Habla de su fetiche “la economía naranja” como motor del desarrollo, la inteligencia y la cultura, pero se niega a buscar un presupuesto digno para la educación pública. Los estudiantes y maestros lo tienen a raya con marchas, huelgas y reclamos.

Duque llegó a la presidencia con la esperanza de gozar con las mayorías en el Congreso. Para las elecciones lo rodearon la mayoría de los partidos con bancadas en las dos cámaras, pero una vez elegido, los partidos que se declararon de gobierno apenas lograron tener estrecha mayoría en el Senado, en la Cámara son minoría. Pero para mayores dolores de cabeza provienen de su propio partido que lo ha abandonado en la mayoría de sus propuestas legislativas, lo ha dejado sólo y le están exigiendo disciplina de partido y un reparto mayor de las cuotas burocráticas.

El senador Uribe, su mentor, aparece unas veces como el “disciplinador” y otras como el componedor, pero, mirando por encima de las gafas señala: “debe corregir”. Duque está en sus manos, pues su partido es el de Uribe, y en ese partido se hace lo que finalmente dice el “ex”. Duque en apenas 100 días ha perdido gobernabilidad. No es fácil para él ser presidente. Si lo quiere ser, corre el peligro de ser calificado como traidor, si piensa con cabeza propia y decide como debe por mandato del pueblo y no de su nominador, está condenado a quedar solo, así se lo ha hecho saber su propio partido. Su sino trágico es realmente su padre político, es un rehén de él, de sus intereses y sus manías. Liberarse no va a ser fácil.

Hasta ahora su Equipo de gobierno es bastante gris. Habló de nombrar equitativamente a mujeres y hombres. Así lo hizo. También de tener un equilibrio entre gente joven y personas con experiencia, se podría decir que también cumplió. Pero eso no es el principio para tener un buen equipo de gobierno. Las personas con “mayor experiencia” vienen del sector empresarial, mostrando una clara inclinación corporativista del Estado, también de la vieja política. La Ministra del Interior, antigua presidenta del Senado, pasó por un juicio por vinculaciones con el paramilitarismo, del que salió por falta suficiente de pruebas. El ministro de hacienda, que ya había ocupado el cargo durante la era Uribe, ha sido cuestionado por inversiones en los llamados “papeles en Panamá”, como también en unos bonos engañosos “de agua” para municipios necesitados de este elemento fundamental y que hoy están endeudados y sin resolver sus problemas de suministro. En el sector agrario, como siempre quedó en manos de sectores conservadores, enemigos de reformas necesarias y contrarios a los acuerdos de la Habana. Los jóvenes nombrados, son tecnócratas sin experiencia, que desconocen procesos, leyes y acuerdos.

Los ministros no están cómodos cumpliendo su oficio cuando el presidente los tiene sitiados con el nombramiento de consejeros suyos y amigazos que se sienten clarividentes maestros dictando clases a alumnos primíparos. Son superministros. Allí encontramos a su antiguo jefe en el BID, el grosero parlanchín Luigi Echeverry, que aunque no tiene puesto oficial, pontifica como perro echado; se teme que sea nombrado como representante del gobierno en varias entidades claves, como Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Bogotá. También están Carlos Enrique Moreno, empresario y cuñado de Uribe, quien lleva los indicadores de gestión de los ministerios y diferentes entidades estatales, además junto con Luigi diseñó la propuesta de gobierno de Duque. Otros consejeros en calidad de superministros son Jaime Amín (oscuro ex – senador de derecha) que funge como Alto consejero para asuntos políticos y como tal se encarga de las relaciones con el Congreso. Pero también están, entre otros: Alvaro García, Alto consejero para las comunicaciones y Víctor Muñoz, Consejero para la transformación digital. ¿Y los ministros para qué?..., tal vez para viceministros. Y después su partido dice que no aparecen. ¿Cómo?

En los temas de paz, Duque ha podido comprobar lo positivo de los acuerdos con las FARC y sobre todo el bien que trae la desmovilización de esta guerrilla, de esta manera a pesar que en la campaña electoral dijo que era necesario realizar profundas reformas a los Acuerdos, ya en el poder, parece haber cambiado, de tal manera que el Gobierno pretende presentar leves reformas al Acuerdo (no así su partido), pero lamentablemente en la práctica no se han hecho los esfuerzos que se requieren por su implementación. Frente a los necesarios diálogos con el ELN, mantiene una posición ambigua y dubitativa, pero es bueno reconocer que sigue abriendo la posibilidad a que se realicen.

Las protestas sociales han estado al orden del día, en los primeros tres meses del actual gobierno se llevaron a cabo 348 movilizaciones, de ellas 40 en Bogotá. En las últimas semanas los estudiantes de las universidades públicas, y en menor medida los profesores, vienen exigiendo una educación pública digna y de calidad con marchas y protestas en un paro sostenido. La represión de la Fuerza Pública ha sido totalmente desmedida.

La propuesta de una reforma tributaria que afectaría en mayor medida a los sectores populares, pues está basada en mayores impuestos para toda la canasta familiar, la protestas sociales y estudiantiles, la confusión en la agenda legislativa, la falta de claridad del Ejecutivo y las contradicciones con su propio partido han llevado a una caída enorme en la aprobación al Jefe del Estado, situándose en tan solo el 27,2% en apenas 100 días de posesionado como presidente.

Acuerdos a media marcha

Al cumplirse dos años del acuerdo final entre Gobierno Colombiano y FARC quisiéramos un mayor cumplimiento y también que en todo el país se respirara el fin del conflicto y la violencia. Pero debemos recordar que la guerrilla del ELN continúa en las regiones, que la delincuencia de los paramilitares sigue siendo un tormento, además que a un grupo disidente de las FARC le pudo más la opción por el narcotráfico, que la dejación de las armas para la construcción de un país sin violencia. Esos grupos que continúan en armas han querido copar los espacios dejados por las FARC, mientras no han sido cubiertos con la contundencia y rapidez que se requiere por parte del Estado, que debe coparlos no solo con las Fuerzas del Estado, sino sobre todo con una presencia social y económica para bien de sus habitantes.

El cumplimiento de los acuerdos, aunque no es el ideal, muestra sin dudas avances importantes en algunos puntos y rezago lamentable en otros.

De los 578 compromisos, el 66% tienen algunos avances y el 22% se consideran totalmente cumplidos. El Sr. Borja Paladini, director del Instituto Kroc, encargado de medir la implementación de los acuerdos señala al respecto: “En un análisis comparado, y teniendo en cuenta que la implementación está prevista a 15 años, hay un importante nivel de cumplimiento”. Dos de los seis puntos pactados del acuerdo, con muy pobres avances, el primero, reforma rural integral y el segundo que busca ampliar la participación política. Sin duda son dos de puntos neurálgicos, dado que están a la base de las causas del conflicto, pero que encuentran las mayores trabas en el partido de gobierno, el Centro Democrático.

En el primero, según lo acordado, se debe crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas en busca de propiciar una reforma agraria, hasta ahora al fondo han ingresado 517.000 hectáreas. También se buscaba la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que avanzaron de manera importante en algunas regiones en el anterior gobierno, pero que parecen estancados en el nuevo. Además se acordó la formalización de la propiedad, buscando que los campesinos a quienes les despojaron de sus tierras y otros que requieren tenerlas debidamente tituladas, les sean devueltas y legalizadas a unos y los otros legalizadas; esto encuentra una gran barrera por parte de los actuales poseedores que “compraron y se apoderaron” de tierras usurpadas y que ahora señalan que son “poseedores de buena fe”. Esta posición es defendida por el actual partido de gobierno y por el partido conservador. Partidos del lado y conformado por intereses terratenientes.

En el punto dos, participación política, apertura democrática para construir la paz, los avances son muy limitados. Se cuenta con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes para el partido FARC, sin embargo las 16 curules para las víctimas están empantanadas, dado que el Centro Democrático las ha torpedeado, tiene miedo a la representación de las víctimas en el Congreso de la República.

El punto tres, sobre el fin del conflicto, ha mostrado el franco y real cumplimiento por parte de las FARC. Se realizó una real y franca dejación de armas, que llevó a la destrucción de 9.000 armas de todos los calibres y ha conducido a la vida civil a 13.000 antiguos guerrilleros. Lamentablemente 84 exguerrilleros han sido asesinados, presumiblemente por paramilitares, según lo señala el partido FARC.

En el punto cuatro, solución al problema de las drogas ilícitas, se han erradicado voluntariamente 24.891 hectáreas, según lo verifica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en tanto que 97.084 familias están inscritas para erradicar voluntariamente sus cultivos. El nuevo gobierno está decidido a volver a fumigar de forma aérea con glifosato, posición que encuentra un rechazo franco por parte de las comunidades que consideran se afecta no solo su salud, sino también sus cultivos lícitos.

En el punto 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, existen tres grandes capítulos. Dos de ellos avanzan claramente, el tercero está bastante huérfano. El primero hace referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aunque ha recibido fuertes embates del Centro Democrático y de la Fiscalía, se ha mantenido prácticamente sin ninguna modificación por la acción de los partidos de oposición y la mirada atenta y manifestaciones de alerta de la Corte Penal Internacional. Su duración es de 15 años, pudiéndose prorrogar otros cinco años e inició trabajos el 15 de marzo del 2018, con 38 magistrados y 17 fiscales. Hasta la fecha han firmado actos de sometimiento 9.676 exguerrilleros y 1.927 militares y policías. Han pedido cupo 478 particulares.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), después de casi un año de alistamiento, iniciará labores el próximo 29 de Noviembre y durará tres años. Cuenta con 11 comisionados. También ha sido cuestionada por dirigentes del partido de gobierno, pero por fortuna su independencia y seriedad han prevalecido. Su trabajo será intenso y para ello va a contar con 9

macroregiones del país (Pacífico, Nororiente, Orinoquía y Amazonía, Caribe e zona Insular, Surandina, Centroandina, Magdalena Medio, Antioquia y Eje Cafetero y Bogotá).

El tercer capítulo es la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que tendrá una duración de 20 años. Esta Unidad inicia labores de forma tímida y deberá buscar información de un gran número de personas desaparecidas, que según el Observatorio del Centro de Memoria Histórica es de 82.998 personas. Debe garantizar la participación de las organizaciones y familiares de las víctimas en su búsqueda.

El punto seis, y último, de los acuerdos es sobre la implementación, verificación y refrendación. Para ello se creó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI). Hasta ahora ha sido convocada dos veces por el nuevo gobierno. Está conformada por tres miembros del gobierno y tres de las FARC, ante un empate serán los delegados de los países garantes Cuba y Noruega los llamados a dirimir.

Es un hecho que la violencia en general en el país ha disminuido, sin embargo continúa siendo muy preocupante la que siguen sufriendo los departamentos del Chocó, Nariño, Cauca y la región del Catatumbo.

La violencia no ha cesado en relación a los líderes sociales, todo lo contrario, si nos atenemos a las cifras en los dos últimos años, ha aumentado. Veámoslo: en el 2016, fueron asesinados 97 líderes y defensores de Derechos Humanos, mientras que en el 2017 el número de muertos entre enero y mitad de noviembre fue de 159. De los 226 ataques, el 12,38% fueron contra mujeres (28), mientras que las víctimas masculinas fueron 198. Quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales (105). Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40). En cuanto a lugares, los homicidios se han registrado en 112 municipios de 27 departamentos del país y el 80,53% de los asesinatos fueron en 9 departamentos. Ellos son: Cauca (48), Antioquia (33), Valle del Cauca (19), Norte de Santander (18), Putumayo (18) Nariño (13), Córdoba (11), Meta (11) y Caquetá (11). Para el año 2018, entre enero y junio (primer semestre) el número de asesinatos fue de 126, es decir se continúa con un incremento de asesinatos a líderes sociales. Al nuevo gobierno le ha faltado contundencia en la protección a los líderes sociales y es muy preocupante que las directrices tomadas son un retroceso en materia de protección en relación a las que tenía el anterior gobierno.

Bogotá, 17 de Noviembre de 2018